 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA	Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA	Fecha: 07/10/2019
		Página 1 de 9

IMPUGNACIÓN A FALLO DE TUTELA
ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA
M.N: DECRETO 1290 DE 2008
CÓD LEX:4819198

Bogotá D.C., 09 de junio de 2020

SEÑORES:
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
SOGAMOSO – BOYACA
E. S. D.

Referencia:	Radicado No. 157593103003-2020-00017-00
Accionante:	ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA
Accionada:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Asunto:	IMPUGNACIÓN A FALLO DE TUTELA

VLADIMIR MARTIN RAMOS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.849.645 de Bogotá, abogado titulado y portador de la T.P. No. 165.566 del C.S. de la J., residente en Bogotá, en calidad de Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según Resolución de nombramiento No. 01131 del 25 de octubre de 2016, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Código 1045, grado 16, debidamente posesionado, y teniendo cuenta que la Resolución 00126 de 31 de enero de 2018 delegó en esta oficina asesora la respuesta a los requerimientos judiciales en el marco de acciones de tutela contra la Entidad, de manera respetuosa procedo a **IMPUGNAR EL FALLO** en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Me permito informar al Despacho que como requisito indispensable para que una persona pueda acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras", ésta debe haber presentado declaración ante el Ministerio Público¹ y estar incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV. Para el caso de **ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA**, informamos que efectivamente cumple con esta condición toda vez que se encuentra incluida en dicho registro por el hecho victimizante **homicidio de LUIS ALEJANDRO CRUZ BUENO** reconocido bajo el marco normativo del **DECRETO 1290 DE 2008 RAD 225284**.


Ahora bien, en relación con los antecedentes del presente expediente, se expone lo siguiente:

- Que **ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA**, interpuso acción de tutela en contra de la Unidad para las Víctimas mediante el cual solicitaba respuesta a su derecho de petición y el pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante **homicidio de LUIS ALEJANDRO CRUZ BUENO**.
- El Despacho mediante fallo proferido el **04 DE JUNIO DE 2020**, resolvió **TUTELAR** los derechos fundamentales alegados por **ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA** y en consecuencia ordenó:

"SEGUNDO.- ORDENAR, a Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas "UARIV, que:

1) En el término de cinco (5) días, proceda a informar a la accionante, si es procedente reconocer indemnización administrativa solicitada.

¹Ley 1448 de 2011, artículo 156, y complementarios del Decreto 4800 de 2011.

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</div>	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 2 de 9

2) En caso de la entidad accionante para dar respuesta necesite algún soporte documental adicional, que corresponda a una entidad pública, será responsabilidad exclusiva de la UARIV su consecución, por lo que su ausencia, no será causa de negatoria del derecho.

3) En caso de ser procedente el reconocimiento de la indemnización administrativa, la UARIV, tendrá término máximo de quince (15) días contados a partir de la respuesta de que trata la primera orden, para la entrega de la medida de indemnización.

El cumplimiento de lo ordenado, tendrá que ser informado de forma inmediata a este Despacho."

En atención a que el fallo judicial proferido por el H. Despacho con el respeto acostumbrado es pertinente mencionarle que este no se encuentra debidamente motivado y por ende la parte resolutoria hace imposible para la **UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS** dar cumplimiento al mismo; por lo anterior procedo a impugnar dicha providencia bajo los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:

II. PROCEDENCIA DE LA IMPUGNACIÓN

El Artículo 86 de la Constitución Nacional estableció expresamente la posibilidad de impugnar los fallos de amparo constitucional bajo la premisa "(...) **EL FALLO, QUE SERÁ DE INMEDIATO CUMPLIMIENTO, PODRÁ IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ COMPETENTE**(...)". Adicional a ello, es claro que, la posibilidad de objetar las decisiones tomadas por los Jueces Constitucionales hace parte del Derecho al Debido Proceso que también es una garantía fundamental.

Ahora bien, en algunas providencias emitidas por el Máximo Tribunal Constitucional se ha hecho énfasis en que dentro del trámite de la acción de tutela, la impugnación debe ser interpuesta dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.


Así mismo, del contenido de este decreto se colige que el único requisito que se exige para que proceda la impugnación es interponerla dentro del término establecido, sin que medie ninguna formalidad adicional. De esta manera se garantiza el derecho constitucional de defensa y se imparte una correcta administración de justicia, asegurando el principio de la doble instancia; por esta razón, encontrándonos en el término legal oportuno me permito interponer la presente impugnación al fallo de tutela.

III. RAZONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS QUE RESPALDAN LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS CON LA EXPEDICIÓN DEL FALLO DE TUTELA

El fallo de tutela emitido se encuentra llamado a ser revocado, como quiera que, resulta violatorio del derecho al debido proceso respecto de actuaciones administrativas por defecto procedimental absoluto razón por la cual no ata al Juez ni a las partes a su cumplimiento, pues al ordenar a la Unidad indicar una fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa, omite y deja de un lado el proceso administrativo legalmente establecido que debe ser de imperiosa observancia y respeto por el operador judicial, ello en atención a que se debe surtir el trámite reglamentario, resulta claro entonces que dicha providencia es contraria a derecho por ende al ordenar que en caso de ser positiva la respuesta indicar fecha para el pago de la indemnización administrativa se pretermite etapas administrativas que debe surtir el (la) accionante **superponiendo sus derechos sobre el de otras víctimas desconociendo el proceso señalado en la Resolución 01049 de 2019** restando legitimidad al trámite establecido en toda actuación y el que regula las formas para acceder a la indemnización administrativa.

Obsérvese su señoría, que con la expedición del fallo judicial a la par se configura una violación al derecho a la igualdad del que gozan todas las personas que acceder a la indemnización administrativa, pues solo bastó con que el accionante elevara una petición para que el despacho, sin ser competente para ello, emitiera una decisión

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 3 de 9

sobrepasando las funciones otorgadas por la constitución y la ley, desconociendo los trámites administrativos establecidos para que una persona pueda acceder a la indemnización administrativa; fallo judicial que bajo las reglas de la sana crítica carece de imparcialidad al excluir a todas aquellas personas que son víctimas y se someten al procedimiento legal para acceder a la indemnización administrativa de manera igualitaria según las condiciones propias de cada caso particular.

Corolario de lo anterior, el fallo resulta desproporcionado frente a la petición elevada por el accionante y abre una brecha para que las víctimas accedan a los beneficios diseñados para la población víctima de manera irregular sin cumplir con las etapas administrativas previas al reconocimiento de la indemnización administrativa, poniendo en riesgo el sostenimiento del sistema y causando simultáneamente un desgaste a la administración de justicia; Ahora bien, al observar los términos mediante los cuales fue emitido el fallo de tutela se evidencia que existe en el mismo un defecto orgánico, como quiera que nos encontramos ante una omisión de la subsidiariedad de la tutela y del debido proceso administrativo, pues para el caso que nos ocupa el despacho carece de competencia para ordenar el pago de la indemnización administrativa, dado que existen otros mecanismos de defensa diferentes a la acción constitucional de tutela que el accionante ya ejercitó, desbordando su competencia legal y funcional como se mencionó anteriormente causando un perjuicio irremediable al sistema de asistencia y reparación integral a las víctimas.

Es necesario hacer claridad respecto a que, no existe ni ha existido vulneración alguna a derechos fundamentales del accionante al pretender someterlo al agotamiento de las etapas administrativas propias de la indemnización administrativa y en virtud de ello el juez de tutela no puede hacer prevalecer los derechos alegados por el accionante sobre el trámite legalmente establecido.

Visto lo anterior, bien puede observarse que es imposible dar cumplimiento a la orden judicial dado que, la aludida violación de derechos fundamentales, que como se mencionó al inicio, la hace una providencia que no ata al juez ni a las partes y en virtud de ello es procedente la revocatoria del fallo solicitada mediante la presente impugnación.

IV. CASO CONCRETO

FRENTE A LA RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN


La Unidad para las Víctimas informa al H. Despacho que se emitió comunicación a la señora **ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA**, mediante comunicación con el **Radicado No. 202072011421901 del 28 de mayo de 2020**, informándole a la accionante que inició un proceso de documentación antes del 6 de junio de 2018, sin embargo, la Unidad para las Víctimas está realizando las verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de información para poder establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida.

FRENTE A LA SOLICITUD DE INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA.

Es importante aclarar al H. Despacho que para que una persona pueda acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras", es necesario haber presentado declaración ante el Ministerio Público² y estar incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV, ello no otorga el derecho a la medida de indemnización administrativa, pues para ello, es menester que se cumplan unos presupuestos adicionales.

En efecto, debe decirse que el derecho a la indemnización administrativa sólo se consolida cuando la entidad analiza el caso concreto, pues existen tres marcos normativos de indemnización administrativa, y cada uno de ellos tiene reglas propias. Es por ello, que hay víctimas cuya inclusión en el RUV sólo les da derecho a acceder a las medidas de atención y asistencia, pero no les da derecho a acceder a las medidas de reparación.

²Ley 1448 de 2011, artículo 156, y complementarios del Decreto 4800 de 2011.

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</div>	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 4 de 9

Adicionalmente, se debe recordar de manera literal el contenido del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, cuyo tenor reza lo siguiente:

"ARTICULO 132. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley. (...) (Negrita y subrayado fuera de texto)

En cumplimiento de este mandato legal, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4800 de 2011, en donde estableció lo relacionado con el acceso a la indemnización administrativa. Este decreto fue incorporado en el Decreto Único del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación No. 1084 de 2015. En la citada reglamentación se definió entre otras cosas lo siguiente:

Artículo 148 del Decreto 4800 de 2011, hoy artículo 2.2.7.3.3. Decreto 1084 de 2015:


"CRITERIOS.La estimación del monto de la indemnización por vía administrativa que debe realizar la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se sujetará a los siguientes criterios: la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la víctima, desde un enfoque diferencial." (Negrita y subrayado fuera de texto)

De la anterior norma, se evidencia que el Gobierno debía determinar criterios objetivos, tablas de valoración, rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante entre otros. En este sentido, se estableció claramente, que no todos los hechos victimizantes son susceptibles de indemnización, y por tanto las víctimas de estos hechos, son aquellas quienes deben adelantar el procedimiento establecido. Y es que la definición de víctima del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 tiene como propósito determinar el ámbito de aplicación de todos los componentes de la política de atención, asistencia y reparación integral, más no del acceso a la indemnización.

Por otro lado, y ante el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004, la Unidad para las Víctimas ha puesto en evidencia la crítica situación que se ha venido presentando de cara a la solicitud directa de pago de la indemnización administrativa por las víctimas de desplazamiento forzado. En reciente pronunciamiento, la Sala Especial de Seguimiento ha considerado que:

"De acuerdo con la información suministrada, la UARIV no cuenta en la actualidad con el presupuesto suficiente para pagar la indemnización administrativa a favor de todos los solicitantes que cumplen con los requisitos exigidos reglamentariamente para ser priorizados;³ mucho menos, el Gobierno Nacional cuenta

³ "Bajo los criterios de priorización, 575.909 hogares víctimas de desplazamiento se encuentran a la espera de recibir la medida de indemnización, lo que equivale a un total de 3.013.910 personas víctimas de desplazamiento forzado pendientes por reconocer esta medida de reparación. Pese a los ingentes esfuerzos realizados para otorgar indemnización por vía administrativa a las víctimas de desplazamiento forzado, el 97.2% de las víctimas *que cumplen con los criterios de priorización previstos en el artículo 2.2.7.4.7 del Decreto 1084 de 2015, aún no han sido indemnizadas*, cifra que se acompaña con las limitaciones de orden operativo y presupuestal que han signado el reconocimiento y pago de esta medida de reparación desde su establecimiento como compensación en dinero, pero que, en todo caso, reafirma el compromiso del Gobierno Nacional en la gestión de los recursos de financiación como garantía del reconocimiento de las medidas de reparación a las víctimas titulares de este derecho fundamental". UARIV. *Cumplimiento a la orden la orden 26 del auto 373 de 2016*. Presentado el 15 de noviembre de 2016.

 <div><div>El futuro es de todos</div><div>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</div></div>	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 5 de 9

con los recursos para atender al resto de personas desplazadas que tienen derecho a la indemnización pero que no han sido priorizadas. Adicionalmente, la misma Unidad no tiene certeza sobre la fecha en la que estarán disponibles los recursos para el pago de todas las medidas indemnizatorias⁴.

Así mismo, encontró la Corte una vulneración al debido proceso, por cuanto la *"inexistencia de una solicitud para acceder a la indemnización administrativa se traduce en que las autoridades no pueden dar una respuesta oportuna, de fondo, clara y precisa a las peticiones que solicitan información respecto de la entrega de la indemnización, que permita que las personas desplazadas tengan alguna claridad acerca de las condiciones en las cuales se va a materializar el derecho"*⁵. En consecuencia, ***"las autoridades responsables deben reglamentar el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la medida, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados, en el transcurso de los 6 años adicionales a los inicialmente contemplados para la satisfacción de las obligaciones recogidas en las Leyes 387 de 1997 y 1448 del 2011"***⁶ (resaltado fuera de texto).

Es pertinente mencionar que el procedimiento se encuentra contemplado en la **Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019**, la cual tuvo lugar como consecuencia de la orden proferida por la Corte Constitucional, al interior del Auto 206 de 2017, en el cual se dispuso que el Director de la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, debía **reglamentar el procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos**.

Fue con ocasión de la memorada orden constitucional, que se estableció el procedimiento que se encuentra reglamentado en la aludida Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019⁷ y el cual contempla cuatro (4) fases de procedimiento, a saber:

- i) Fase de solicitud de indemnización administrativa
- ii) Fase de análisis de la solicitud.
- iii) Fase de respuesta de fondo a la solicitud.
- iv) Fase de entrega de la medida de indemnización.


Las rutas en la Resolución 01049 de 2019 son las siguientes:

- **Solicitudes Prioritarias:** solicitudes en las que se acrediten situaciones de extrema vulnerabilidad según lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Resolución.
- **Solicitudes Generales:** solicitudes en las que no se acredite ninguna situación de extrema vulnerabilidad.

El procedimiento establecido por esta Unidad, Su Señoría, busca la garantía y protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral; es menester que considere que es jurídicamente razonable la espera que pedimos a las víctimas en cada proceso particular, pues el Estado sigue adelantando acciones positivas en aras de conseguir indemnizar a todos aquellos que tengan derecho a la medida, pero con la comprensión de que, como ya ha sido manifestado por la Corte, *"(s)i bien los derechos fundamentales de las víctimas deben ser garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a millones de personas y no cuenta con los recursos suficientes, es factible plantear estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a criterios de priorización. Lo anterior no desconoce los derechos de*

⁴Corte Constitucional. Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

⁷*"Por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones."*

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 6 de 9

las víctimas sino por el contrario asegura que, en cierto periodo de tiempo, y no de manera inmediata, todas serán reparadas⁸.

Señor Juez; para el caso particular de **ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA**, referente a la **indemnización administrativa por DESPLAZAMIENTO FORZADO**, bajo el marco normativo **DECRETO 1290 DE 2008 RAD 225284**, informamos que no se evidencia ninguna situación de vulnerabilidad extrema, sin embargo, al consultar en nuestros registros se observa que inició con anterioridad un proceso de documentación para acceder a la indemnización administrativa, por lo que ha ingresado al procedimiento ya mencionado por la **RUTA TRANSITORIA**, de acuerdo con la disposición contenida en el artículo 15 de la derogada Resolución 01958 de 2018, cuyo término de respuesta fue extendido por noventa (90) días adicionales a los inicialmente estipulados, según el artículo 20 de la Resolución 01049.

Ahora bien, se hace necesario informar a su Honorable Despacho que esta entidad se encuentra en el estudio de la documentación aportada para determinar si dichos documentos están completos y no presentan ninguna novedad o si por el contrario se hace necesario aportar documentos adicionales a los ya entregados por **ANA DEL TRANSITO CEPEDA MESA**, para establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida.

La respuesta que emitió esta entidad con radicado de salida **202072011421901 del 28 de mayo de 2020**, se encuentra conforme con los presupuestos que ha dispuesto la jurisprudencia constitucional, toda vez que, ha resuelto de fondo la pretensión, pues le informa debidamente cuál es el procedimiento que habrá de seguir para acceder a la medida indemnizatoria, guarda congruencia con lo pedido y ha sido oportuna⁹.

Una vez surtido todo el procedimiento, si la decisión es favorable, la Unidad para las Víctimas, en la notificación del acto administrativo de reconocimiento, procederá a informarle la fecha de pago de la indemnización administrativa, en los términos definidos por el artículo 14 de la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019¹⁰.

Lo anterior, no implica un desconocimiento de la calidad de víctima de la parte accionante, ni mucho menos resulta esta respuesta negatoria del derecho, pues, en principio cumple con los presupuestos de i) residir en el territorio nacional; ii) encontrarse incluido (a) en el Registro Único de Víctimas (RUV) por uno de los hechos consagrados en la normatividad; y iii) el hecho victimizante guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto armado¹¹.

Es importante que conozca su Señoría, que si bien es deseable que la indemnización por vía administrativa se entregue a todas las víctimas en el menor tiempo posible, rogamos comprender que el sistema debe administrarse de acuerdo con los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal.


Mediante el Decreto 1725 de 2012 el Gobierno Nacional adoptó el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conformado por el “conjunto de políticas, lineamientos, normas, procesos, planes, instituciones e instancias” previstos en los Decretos 4800 y 4829 de 2011, 790 de 2012, y los Documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, para definir el cómo se cumplirán las medidas previstas en la Ley a favor de las víctimas dentro de una conjugación armónica de **los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal.**

⁸ Corte Constitucional. Sentencia C-753 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo

⁹ Cfr. Sentencia T- 048 de 2016

¹⁰ **Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019**, artículo 14. “**Fase de Entrega de la indemnización.** En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas. En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el tránsito entre vigencias presupuestales no se modificará el orden o la colocación de las víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionarán en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de indemnización y ordenan su pago (...)”.

¹¹ Adicionalmente, para los hechos victimizantes como atentado terrorista o accidentes sufridos por MAP, MUSE O AEI, deben acreditarse las lesiones producidas. Parágrafo 2 del artículo 2.

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</div>	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 7 de 9

Al respecto, es preciso indicar que el principio de la sostenibilidad fiscal, que debe cumplir la política de asistencia, atención y reparación de las víctimas, fue establecido en el artículo 19 de la Ley 1448 de 2011, declarado exequible mediante la sentencia C-753 del 30 de octubre de 2013. La Corte Constitucional en el comunicado de prensa de la mencionada sentencia manifestó al respecto:

*"En los programas masivos de reparación característicos de contextos de violencia generalizada y sistemática en los que un gran número de personas han resultado víctimas, se reconoce la **imposibilidad de que un Estado pueda reparar y particularmente indemnizar por completo a todas las víctimas en un mismo momento**. Si bien los derechos fundamentales de las víctimas deben ser garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a millones de personas y no cuenta con los recursos suficientes, es factible plantear estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a criterios de priorización. **Lo anterior no desconoce los derechos de las víctimas sino por el contrario asegura que en cierto periodo de tiempo, y no de manera inmediata, todas serán reparada**." (Subrayado fuera de texto)*

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

ORDEN CONTRARIA A DERECHO – DERECHO A LA IGUALDAD - DEFECTO ORGÁNICO


También resulta pertinente señalar que el fallo emitido constituye una **providencia ilegal** que no ata al Juez ni a las partes dado que el mismo contiene un defecto procedimental absoluto, como quiera que, al ordenar a esta Entidad **dar fecha cierta a la solicitud del pago de la indemnización administrativa**, transgrede el proceso administrativo legalmente establecido que debe ser de absoluta observancia por parte del operador judicial pues, previo al pago de una indemnización administrativa debe surtir el trámite reglamentario, en cual la unidad para las víctimas ya brindó respuesta al accionante, y a pesar de ello se ordenó fecha de pago de la indemnización para el pago imposible de realizar, luego resulta claro que dicha providencia es contraria a derecho, pues vulnera el debido proceso del que debe gozar toda actuación administrativa, superponiendo sus derechos sobre el de otras víctimas, desconociendo el proceso señalado para el acceso a las medidas de indemnización.

Corolario, el fallo resulta desproporcionado frente a la petición elevada por la accionante y abre una brecha para que las víctimas accedan a las otras medidas de reparación, como es la indemnización administrativa y a los beneficios diseñados para la población víctima de manera irregular sin cumplir con las etapas administrativas previas al reconocimiento, poniendo en riesgo el sostenimiento del sistema y causando simultáneamente un desgaste a la administración de justicia.

Visto lo anterior, bien puede observarse que es imposible dar cumplimiento a la orden judicial dada ya que, la aludida violación de derechos fundamentales, que como se mencionó al inicio, la hace una providencia de imposible cumplimiento que no ata al juez ni a las partes.

CONFIGURACIÓN DE LA CARENIA DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

Así las cosas, queda demostrado que la Entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, cesando de esta manera las conductas que dieron lugar a su insatisfacción y que hoy presenta como argumentos principales para la interposición de la acción de tutela. En consecuencia, solicito al señor Juez, respetuosamente, declare la **CARENIA DE OBJETO** dentro del presente asunto. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: "(...) No obstante lo anterior, la Corte también ha sostenido que cuando la Sala revisa fallo de instancia, y verifica que el derecho invocado ha debido concederse, a pesar de que en el transcurso del proceso haya desaparecido la situación de hecho que originó la acción, lo procedente es revocar la decisión revisada, aunque no se imparta ninguna orden porque sería inocuo hacerlo y en todo caso lo procedente es declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia. (...)" (Sentencia T-698 de 2002).

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA		Fecha: 07/10/2019
			Página 8 de 9

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre el tema de la **CARENCIA DE OBJETO**, ha dicho:

"(...) De acuerdo con la ley y en reiterada jurisprudencia¹², está señalado que si en el trámite de la acción de tutela sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales cuya protección se solicita ha cesado, o se ha consumado en forma tal que sea imposible restablecerle al solicitante el goce efectivo de su derecho conculcado, la acción pierde eficacia y razón de ser, al extinguirse el objeto jurídico sobre el cual recaería, resultando inocua cualquier decisión al respecto

DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y GRADUALIDAD.

Por otra parte es importante señalar y solicitar de la manera más atenta y respetuosa a su Honorable Despacho considerar que si bien es deseable que la indemnización por vía administrativa se entregue a todas las víctimas en el menor tiempo posible, el sistema debe administrarse de acuerdo con los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad, sin perjuicio de los derechos de las víctimas, cuya garantía está en cabeza de la Unidad para las Víctimas.

PRINCIPIO DE GRADUALIDAD Y PROGRESIVIDAD PARA EL PAGO DE LAS REPARACIONES ADMINISTRATIVAS.

Ahora bien es preciso indicar que en virtud de los principios de progresividad y gradualidad contemplados en los artículos 17 y 18 de la Ley 1448 de 2011, respectivamente, así como con el objetivo de garantizar una reparación efectiva y eficaz de conformidad con el numeral 4º del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011, el acceso a las medidas de reparación contempladas en el Decreto 4800 de 2011, deberán garantizarse con sujeción a los criterios establecidos en la Ley 1448 de 2011. Para el efecto, también podrán tenerse en cuenta, entre otros, la naturaleza del hecho victimizante, el daño causado, el nivel de vulnerabilidad basado en un enfoque diferencial que tenga en cuenta características especiales de cada núcleo familiar.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, la Unidad para las Víctimas irá otorgando la indemnización gradualmente, contando para ello con un plazo hasta el año 2021, advirtiendo que conforme a las disposiciones legales se deberán priorizar a las víctimas que presentaron su solicitud por el Decreto 1290 de 2008 y a las que son parte de las sentencias de Justicia y Paz.

FRENTE A LA INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN ALEGADA

Así las cosas, queda demostrado sin el mayor asomo de duda que la Entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la parte accionante como lo manifiesta el fallo que hoy se impugna, y en el evento de haberse incurrido en tal situación, la unidad adelantó satisfactoriamente las acciones tendientes al cumplimiento del deber legal, cesando de esta manera las conductas que dieron lugar a su insatisfacción y que hoy presentan como argumentos principales para la interposición de la acción de tutela y para la emisión equivocada del fallo, pues se encuentra configurada la orden contraria a derecho y hecho superado, frente a las pretensiones y la decisión judicial.

VI. PETICIÓN

Por los argumentos fácticos y jurídicos expuestos anteriormente, respetuosamente, solicito conceder la impugnación presentada en contra del fallo de primera instancia proferido por su Despacho y como consecuencia de ello, sírvase remitir el proceso al superior jerárquico con la finalidad de que revoque el fallo de primera instancia y en su lugar niegue las peticiones de la acción constitucional.


VII. PRUEBAS

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá 7430000

Recepción de correspondencia: **Carrera 85D #46A 65 - Complejo Logístico San Cayetano**. Bogotá D.C.

www.unidadvictimas.gov.co

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA	Código: 110,16,15-41
	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA	Fecha: 07/10/2019
		Página 9 de 9

Sírvase su señoría, tener como pruebas las obrantes en la foliatura del expediente, especialmente:

1. Respuesta al derecho de petición con radicado 202072011421901 de fecha 28 de mayo de 2020.
2. Comprobante de entrega.

VIII. ANEXOS

- Resolución de nombramiento No. 01131 del 25 de Octubre de 2016, la cual reposa en el expediente de tutela.

IX. NOTIFICACIONES

En la ventanilla única de radicación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicada en la Carrera 85D #46A 65 - Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.; número telefónico:(+571) 4233075 - Celular: 322 8152333. Fax número 7965151 opción 9, o a través nuestro buzón judicial, al cual puede acceder desde nuestra página web, en el siguiente hipervínculo <http://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/buzon-judicial/43703>, o al correo electrónico: notificaciones.juridica@unidadvictimas.gov.co

Atentamente,



VLADIMIR MARTIN RAMOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: JESSICA MATIAS _ GRJ